



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 09 de Febrero de 2021

Auto Interlocutorio No. \_\_\_\_\_

CONJUEZ PONENTE: JOSE EUSEBIO MORENO

Medio de Control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral
Expediente:	76001-23-33-000-2016-00728-00
Demandante:	Anne Alexandra Arteaga Tapia Apoderado Ricardo Alvarez Ospina ricardoalvarezospina@gmail.com
Demandado:	Nación – Rama Judicial – Desaj deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto	Auto niega llamamiento en garantía y vinculación de litisconsorte necesario

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el llamamiento en garantía solicitado por el ente demandado Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, visible a folios 138 a 140 del expediente.

II. ANTECEDENTES

2.1. La Demanda

La señora Anne Alexandra Arteaga Tapia a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandó a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, para que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 2080 del 22 de agosto de 2014 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y la Resolución No. 6122 del 03 de noviembre de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, mediante las cuales se negó el derecho de petición propuesto por la demandante, para el reconocimiento y pago efectivo de la reliquidación de la prima especial de servicios y el reconocimiento de la naturaleza salarial de dicha prestación.

2.2. Llamamiento en garantía de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

Durante el término de traslado de la demanda solicitó que se llame en garantía a la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fundamentando su petición en el siguiente sentido:

*"(...) La NACIÓN - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, tenemos que cuando el Legislativo expidió la Ley 4 del 18 de mayo de 1992, AUTORIZÓ al GOBIERNO NACIONAL para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, por lo tanto la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de servidores judiciales radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir, que es éste, quien basado en la Constitución y la Ley, determina dichas asignaciones, sin que la RAMA JUDICIAL tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia, pues solo se cumple con dichos actos administrativos una vez expedidos por la autoridad competente (función ejecutora, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales en los términos y valores establecidos de manera anual en cada tabla de salarios).*

*Por lo tanto, la defensa de legalidad de los decretos hoy cuestionados está en cabeza del ejecutivo, por ser los generados de los mismos y reposar los antecedentes que dieron lugar a su expedición en sus archivos, por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones, implicaría necesariamente la inaplicación de la ley 4 de 1992, expedida por el GOBIERNO NACIONAL.*

*(...)*

*Fueron expedidas por el Gobierno Nacional conforme facultades de la Ley 4 de 1992, reproduciendo año tras año, que el 30% del salario devengado por los funcionarios judiciales, se considera como prima especial de servicios.*

*Tenemos que las apropiaciones presupuestales para el pago de las acreencias laborales por nómina se realizan teniendo en cuenta los Decretos del Gobierno Nacional que regulan la forma de liquidación y cuantía de cada una de tales acreencias, por lo que de accederse a las pretensiones implicaría un mayor valor en la asignación del demandante y de los demás funcionarios que reclaman similares pretensiones, haciéndose necesario que el Ministerio de Hacienda atienda el pago asignando los recursos de presupuesto que requiere la Rama Judicial, pues aunque se ha solicitado a tal Ministerio reiteradamente los recursos presupuestales para tales efectos, hasta la fecha no han sido dispuestos y apropiados.*

*Una vez se conoció los efectos vinculantes de la Sentencia del 29 de Abril del 2014 emitida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda de Conjuces, dentro del expediente N° 11001-03-25-000-2007-00087-00 con ponencia de la Dra. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, esto es, cuando quedó ejecutoriada (22 de julio de 2014), la administración judicial procedió a calcular el monto de las obligaciones que se pudieran derivar de su cumplimiento y requirió a los organismos competentes instrucciones para acatarla, así como la adición presupuestal del caso al Ministerio de Hacienda. Con este fin se enviaron los oficios DEAJ14-927 del 27 de agosto de 2014, reiterado con oficio DEAJ14-1191 del 4 de noviembre de 2014, de manera que de su trámite emanara la autorización y situado oportuno de recursos para que la administración judicial pudiera atender las obligaciones salariales surgidas a partir de la ejecutoria del mencionado pronunciamiento.*

*El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en oficio de fecha 30 de diciembre de 2014 a través del Director General de Presupuesto Público Nacional (Dr. FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ), radicado en el Centro de Gestión Documental del Nivel Central con registro EXDE15-50 el 05 de enero de 2015, señala en lo pertinente:*

*"...En ese contexto se reitera que toda erogación incluido el gasto que usted sugiere, debe contar con un título constitutivo de gasto. Pero en estos casos no nos encontramos frente a una sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, que desde luego constituiría un título legítimo de gasto, porque es un crédito judicialmente reconocido, sino que lo situación judicial que estamos analizando trata de una sentencia de simple de nulidad.*

*Respecto a las sentencias de simple nulidad, en principio podemos decir que no son título constitutivo de gasto, por la sencilla razón que en nuestro ordenamiento jurídico no existe la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos particulares, que se expidan con fundamento en uno general que haya sido anulado...*

*"...Entonces, la verdadera pregunta consiste en determinar lo siguiente: ¿cuál es el efecto de una sentencia de nulidad? La respuesta se encuentra en la misma jurisprudencia:*

*"Para responder este interrogante cabe destacar que el fin móvil o motivo de las acciones de nulidad de actos administrativos es el del mantenimiento de la legalidad abstracta, y no el del restablecimiento de derechos de carácter subjetivo. Por lo tanto, las sentencias proferidas en esos juicios, que simplemente declaran la nulidad de actos administrativos no tienen efectos creadores de derechos individuales"*

### **2.3. Solicitud de vinculación del Litisconsorte Necesario.**

Señaló el apoderado de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que en esta oportunidad resulta viable la integración del contradictorio en calidad de litisconsorte necesario, con la vinculación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el siguiente sentido:

*"De manera que como a la fecha del presente pronunciamiento la posición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha vanado en relación a los efectos vinculantes de las sentencias de simple Nulidad, ni sobre la solicitud de adición de recursos para cubrir las obligaciones que se pudieran derivar del fallo del 29 de abril de 2014, SE DEBE ACCEDER A LA SOLICITUD DE VINCULACION DE ESTA ENTIDAD COMO LITISCONSORTE NECESARIO, posición que tiene sustento en el marco legal que impone este actuar en materia de afectación y ejecución presupuestal, normas éstas que deben amparar todas las actuaciones públicas de la administración en cuanto a la ordenación del gasto:*

*(...)*

*Es así que autorizar sin respaldo presupuestal el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales que reclama el peticionario por concepto de Prima especial equivalente al 30% de la asignación básica mensual, por los tiempos de servicio en los que ha desempeñado el cargo de Juez de la República, en Despachos adscritos a la Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, sería actuar por fuera del ámbito de nuestra competencia y generaría a cargo de la entidad un detrimento fiscal.*

*(...)*

*Como se observa de lo anterior, no se puede realizar pagos diferentes a los legalmente establecidos por el Gobierno Nacional, y en el caso que se pague lo solicitado sin la AUTORIZACION del MINISTERIO DE HACIENDA estaríamos omitiendo un deber y una obligación legal como ente pagador y con ello la comisión de un delito, trayendo consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.*

*(...)*



De las disposiciones y jurisprudencia transcritas se deriva que la administración judicial no puede generar ni disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales, sin contar previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con obligaciones que le impongan la ley y las sentencias judiciales.

Finalmente es preciso resaltar, que, si tuviéramos la autorización presupuestal por parte del MINISTERIO DE HACIENDA de CONCILIAR EXTRA JUDICIAL O JUDICIALMENTE este tipo de reclamaciones, se pagaría sin necesidad de esperar una sentencia en firme, por lo tanto, si se debe integrar como LITISCONSORTE NECESARIO al MINISTERIO DE HACIENDA, quien no ha asignado las partidas presupuestales para el pago de estas diferencias salariales a favor del demandante.

Es necesario recordar que es la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos, mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. Tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades y organismos del Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo democrático de la gestión pública y el servicio ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación.

Así las cosas, tal y como lo afirma el demandante, la Sentencia del 29 de Abril del 2014 emitida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda de Conjuces, dentro del expediente N° 11001-03-25-000-2007-00087-00 con ponencia de la Dra. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, en la acción de nulidad hizo parte: El Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, declaró la nulidad de las normas arriba enunciadas, las cuales REITERO, fueron expedidas por el GOBIERNO NACIONAL.

Respecto de esta entidad, la Rama Judicial ofició igualmente al Departamento Administrativo de la Función Pública, órgano competente para fijar las políticas en materia salarial y prestacional en el sector público, consultando específicamente sobre los efectos de la citada declaratoria frente a la disposición salarial vigente para el año 2014 en la Rama Judicial que corresponde al Decreto 194 de 07 de febrero de 2014, dado que ésta norma contiene la misma redacción y procedimiento para liquidar la prima especial que de hecho ha aplicado la entidad, así como sobre los decretos expedidos por el Ejecutivo del año 2008 en adelante, los cuales gozan de la presunción de legalidad como quiera que no han sido anulados por el ente competente. De la consulta elevada al citado ente administrativo dan cuenta los oficios DEAJRH14-6861 del 27 de agosto de 2014, DEAJ14- T212 5 de noviembre de 2014 y el DEAJRH 15-191 de 03 de marzo de 2015.

En comunicación de fecha 17 de abril de 2015, suscrita por la Directora Jurídica, Dra. CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN -registro EXDE15-0473 de 22 de abril de 2015 de nuestra correspondencia institucional-, con sustento en conceptos y sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia cuyos apartes concernientes cita textualmente, manifiesta, entre otros, que la sentencia del 29 de abril de 2014 es el resultado del medio de control de simple nulidad, cuyo objeto es la defensa y protección del interés general y del orden jurídico abstracto, que se limita a decretar o no la nulidad del acto impugnado y por tanto no puede imponer condenas pecuniarias, ni sustituir la decisión por otra, ni rehacer el acto, ni tomar medidas distintas a las atinentes a la propia nulidad, razón por la que en el referido fallo nada se decidió en torno a derechos subjetivos(sic).

### III. CONSIDERACIONES

#### 3.1 Naturaleza Jurídica del Llamamiento en Garantía

El artículo 225 del CPACA respecto de la figura del llamamiento en garantía, consagra lo siguiente:

*"Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

*El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*

*El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos*

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

*El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen".*

Conforme a la anterior disposición, en los asuntos contencioso administrativos es procedente el llamamiento en garantía bajo el amparo de una relación legal o contractual, para lo cual de forma general en la solicitud se deben concretar los hechos en que se basa y los fundamentos de derecho.

Ahora bien sobre las exigencias para que proceda el llamamiento en garantía, el Consejo de Estado en providencia del 25 de mayo de 2016, con ponencia del Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que en orden a garantizar la seriedad que toda convocatoria a juicio demanda, el llamante no solo debe exponer los hechos en que se apoya y los fundamentos de derecho que lo sustentan, sino que también debe acompañar prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual que le permite formular la convocatoria, con el propósito de que el juez pueda establecer los extremos de la nueva relación procesal fundado en supuestos fácticos y jurídicos mínimos, pero suficientes para apoyar el llamamiento.

Igualmente, el Alto Tribunal en providencia del 29 de junio de 2016, con ponencia del Magistrado Danilo Rojas Betancourth, reiteró que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del CPACA, le corresponde a la parte interesada cumplir una serie de requisitos mínimos para que se pueda admitir la solicitud de llamamiento en garantía.

Ciertamente la norma señala que le corresponde a la parte llamante mencionar en el escrito de su solicitud: la identificación del llamado, la información de domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, y los hechos en que se fundamenta el llamamiento; adicionalmente, existe la carga de aportar prueba sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía, pues la vinculación del tercero al proceso y su inclusión en la litis, implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al convocado, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial.

En la misma providencia se explicó el concepto de vínculo legal, aclarando que éste debe provenir de un precepto normativo que expresamente señale que a la entidad que se llama en garantía le asiste la obligación de concurrir a la reparación de un eventual daño que sea atribuido en cabeza de la entidad llamante.

De este modo la mera invocación de disposiciones generales que establecen la competencia de las entidades del Estado en materia del daño discutido en el litigio, no resulta suficiente para fundamentar la vinculación como tercero, pues para que se pueda invocar el llamamiento en garantía con fundamento en un vínculo legal, se debe verificar que el nexo establecido en determinada norma contenga de forma expresa la obligación de concurrencia.

De la disposición citada, se desprende como requisito esencial para la procedencia del llamamiento que, por razón de una relación legal o contractual, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia en virtud de la cual, el demandado se ve obligado a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago, por lo tanto al no encontrar acreditados los requisitos para que se configure el llamamiento en garantía, el Despacho despachara desfavorablemente la solicitud presentada por la parte demandada.

### **3.2 Del Litisconsorcio Necesario.**

La figura del litisconsorcio necesario no fue regulada en la Ley 1437 de 2011, por lo que en atención al artículo 306<sup>1</sup>, nos debemos remitir a lo establecido en el Código General del Proceso en su artículo 61 del siguiente tenor.

---

<sup>1</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

*“Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.*

*Quando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.*

*En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.*

*Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.*

*Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.*

*Quando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.”* (Negrillas fuera de la norma.)

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos estar en presencia de un litisconsorcio necesario cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, de tal forma que el litigio no puede resolverse sin la comparecencia del litisconsorte, puesto que existe uniformidad para todos los sujetos que integran la parte correspondiente.

El Consejo de Estado ha desarrollado esta figura:

*“Existe litisconsorcio necesario cuando hay pluralidad de sujetos en calidad demandante (litisconsorcio por activa) o demandado (litisconsorcio por pasiva) que están vinculados por una única **“relación jurídico sustancial”**; en este caso y por expreso mandato de la ley, es indispensable la presencia dentro del litigio de todos y cada uno de ellos, para que el proceso pueda desarrollarse, pues cualquier decisión que se tome dentro de éste es uniforme y puede perjudicar o beneficiarlos a todos.”*

Sobre las características del litisconsorcio necesario, el tratadista Miguel Enrique Rojas Gómez, indicó<sup>2</sup>:

*“Se ha precisado que cuando la pluralidad de sujetos en posición de demandantes o demandados se explica por estar vinculados a una única relación sustancial aducida como fundamento de la demanda, hay un litisconsorcio necesario, salvo que medie autorización legal para prescindir de la convocatoria de alguno de ellos*

<sup>2</sup> Lecciones de derecho procesal. Tomo 2 Procedimiento Civil. ESAJU. Escuela de Actualización Jurídica. Páginas 87 y 88. Miguel Enrique Rojas Gómez.



*[...] cualquier decisión que se adopte, aun por consenso, respecto de la cuestión examinada recaerá sobre la única relación material debatida y comprometerá por igual a los individuos vinculados a ella, tiene que ser tomada por el conjunto de los litisconsortes o frente a todos ellos; y si el litigio se define por sentencia, esta tendrá que ser común a ellos. De ahí que en el proceso el contradictorio deba integrarse con todos los litisconsortes para que sean escuchados antes de resolver sobre la pretensión, lo que explica el esmero del legislador para facilitar la convocatoria de aquellos, al ofrecer múltiples oportunidades y mecanismos para hacerlo e insistir en la importancia de integrar el litisconsorcio cuanto antes."*

Con fundamento en lo anterior, debe definirse en cada caso en particular la naturaleza de la relación sustancial objeto del litigio, la cual se encuentra determinada en los hechos y derechos materia del proceso, lo cual supone un análisis para establecer si realmente es viable efectuar un pronunciamiento de fondo sin la comparecencia de del sujeto que considera debe ser vinculado al proceso.

Así las cosas, respecto a la solicitud de vinculación como litisconsorte necesario de la Nación – Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ésta será negada por las siguientes razones:

1.- No es dentro de sus funciones constitucionales y legales asignadas a la Nación – Presidencia de la República, quien determina la planta de cargos de la Rama Judicial, ni tampoco su disposición presupuestal, situación que olvida el apoderado judicial que el único que lo hace es la LEY, por lo tanto es improcedente tratar de integrar como litisconsorte necesario por pasiva en esta acción particular, a la ya demandada Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, pretendiendo vincular improcedentemente como ya se dijo, a la Presidencia de la República, la que en ninguna de sus funciones constitucionales y/o legales, tiene la competencia y las atribuciones en este sentido, conforme a las pretensiones de la acción que dan origen a este medio de control particular. Por lo tanto, se negará por improcedente la vinculación como litisconsorte necesario por pasiva de la Nación – Presidencia de la República.

2.- Con relación a la vinculación como litisconsorte necesario a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se le recuerda al peticionario que si bien es cierto, quien dispone y administra el Presupuesto Nacional para el siguiente ejercicio fiscal año por año es el Ministerio de Hacienda, no es menos cierto que una vez asignadas a través de la Ley, las partidas presupuestales para cada ente del Estado para su ejecución presupuestal en cada ejercicio fiscal, es un hecho notorio y como tal lo invocamos, no es el Ministerio en el caso de la Rama Judicial, quién ejecuta esas partidas presupuestales asignadas a la Rama y por lo tanto no es el Ministerio de Hacienda quien deba ser llamado a responder por asuntos presupuestales de ejecución que por ley conforme a la de presupuesto anualmente, le corresponde es a la Rama y no al Ministerio como



Radicación  
Medio de control  
Demandante  
Demandado

: 76001-23-33-000-2016-00728-00  
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL  
: ANNE ALEXANDRA ARTEAGA TAPIA  
: NACION - RAMA JUDICIAL - DESAJ



154

9

se ha expresado, por lo tanto este litisconsorcio pretendido para el Ministerio de Hacienda y crédito Público tampoco está llamado a prosperar y así se declarará.

En mérito de lo expuesto, considera el Despacho que se debe negar tanto el llamamiento en garantía como la vinculación de litisconsorte necesario, realizados por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial Valle Del Cauca contra la Nación – Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

En mérito de lo expuesto se,

#### RESUELVE:

**PRIMERO.- NEGAR** el llamamiento en garantía formulado por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VALLE DEL CAUCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.- NEGAR** la integración como litisconsorte necesario a la Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO.-** En firme esta providencia, continúese con el trámite procedente<sup>3</sup>.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE EUSEBIO MORENO  
Conjuez Ponente

---

<sup>3</sup> VoBo Secretario  
Proyectó Andrés M.